



PROVINCIA DE BUENOS AIRES
PROCURACIÓN GENERAL DE LA
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

L-129668-1

"Britos María Georgina c/ Gobernación de la Prov. de Bs. As.
s/ Accidente de Trabajo - Acción Especial"
L.129.668

Suprema Corte de Justicia:

I. El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de La Plata hizo lugar a la acción promovida por María Georgina Britos contra la Provincia de Buenos Aires en reclamo de indemnización por la minusvalía laborativa de la que es portadora a raíz del accidente de trabajo acaecido el 6 de abril del año 2018 y condenó, en consecuencia, a la demandada a abonar a la actora dentro de los diez (10) días de notificado las sumas que fijó en concepto de prestación dineraria por incapacidad laboral parcial y definitiva (arts. 6.1, 12, 14.2 "a" de la ley 24.557).

Asimismo, dispuso que a partir de que el pronunciamiento quede firme, y vencido el término de diez días otorgado para su cumplimiento, y hasta el efectivo pago, el producido devengará un interés equivalente a la tasa activa promedio cartera general nominal anual vencida a treinta (30) días del Banco de la Nación Argentina, a la luz de lo prescripto por el art. 12 inc. 3 de la ley 24.557 conforme el texto dispuesto por la ley 27.348 y 770 del Código Civil y Comercial (v. veredicto y sentencia definitiva del 12-VII-2022).

II. Contra dicho modo de resolver se alzó la letrada apoderada de la Fiscalía de Estado a través de sendos recursos extraordinarios de nulidad y de inaplicabilidad de ley deducidos mediante escrito electrónico de fecha 17-VIII-2022 -oportunamente concedidos por el colegiado de origen a través de la resolución del 13-IX-2022-, cuya vista se sirve conferirme esa Suprema Corte el 13-II-2023, en los términos de lo prescripto por el art. 297 del Código Procesal Civil y Comercial.

III. En sustento de su pretensión invalidante, el Fisco recurrente denuncia, en suma, que el tribunal interviniente ha incurrido en omisión de tratamiento de cuestiones que juzga esenciales para arribar a la recta definición de la controversia ventilada en autos, déficit que, según su ver, importa violación del art. 168 de la Constitución provincial.

Menciona en el aludido carácter el reproche dirigido a impugnar la validez constitucional del art. 11 de la ley 27.348, modificadorio del art. 12 de la Ley de Riesgos del

Trabajo 24.557, que, vale recordar, establece, por un lado, las pautas para determinar el valor del ingreso base salarial que debe tomarse como módulo para el cálculo de la cuantía de las prestaciones dinerarias previstas en el régimen especial citado. Ello, en cuanto el primer párrafo del actual texto de dicho precepto legal dispone en forma expresa que "*(...) a los fines del cálculo del valor del ingreso base, se considerará el promedio mensual de todos los salarios devengados de conformidad con lo establecido por el artículo 1° del Convenio N° 95 de la OIT (art. 12.1, ley 24.557, texto según ley 27.348) y actualizados de conformidad a la variación del índice RIPTE (...)*". Y, para completar este proceso, la norma bajo análisis establece que corresponde aplicar un interés equivalente al promedio de la tasa activa cartera general nominal anual vencida a treinta (30) días del Banco de la Nación Argentina, respecto del importe previamente obtenido; ello, desde la fecha de la primera manifestación invalidante y hasta el momento de la liquidación de la indemnización por determinación de la incapacidad laboral definitiva (art. 12, inc. 2° de la Ley 24.557, texto según ley 27.348). Por otro lado, el inciso tercero de la norma en cuestión prevé que a partir de la mora en el pago de la indemnización será de aplicación lo estipulado por el artículo 770 del Código Civil y Comercial, acumulándose los intereses al capital, devengando su producido intereses conforme la tasa activa anteriormente mencionada, hasta la efectiva cancelación.

En ese sentido, manifiesta que, en el caso, a los fines del cálculo de la indemnización otorgada a la trabajadora, el órgano colegiado aplicó lisa y derechamente el art. 12 de la ley 24.557 (texto según ley 27.348), norma cuya declaración de inconstitucionalidad había sido expresamente peticionada por su parte en el capítulo IX del escrito de contestación de demanda del 31-X-2019, con sustento en sostener que introduce un mecanismo indexatorio que vulnera el derecho de propiedad de su representada al obligarla a pagar una indemnización actualizada que resulta confiscatoria, a la par que transgrede el principio rector que rige en nuestro país que prohíbe la repotenciación de deudas (art. 17, Constitución nacional).

Destaca que tal planteo resultaba prioritario y de carácter esencial para la adecuada resolución de la causa, no obstante lo cual su tratamiento fue soslayado por los magistrados intervinientes.



PROVINCIA DE BUENOS AIRES
PROCURACIÓN GENERAL DE LA
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

L-129668-1

IV. Adelanto mi opinión adversa al progreso de la pretensión nulificante.

Lo entiendo así pues de la lectura del decisorio atacado surge que el *a quo*, luego de tener por acreditada la incapacidad laborativa que porta la accionante, declaró la admisibilidad de la acción impetrada en los términos de las previsiones contenidas en los arts. 1, 6, 12, 14 y cc. de la ley 24.557, procediendo a continuación a establecer el importe indemnizatorio correspondiente.

Para ello, realizó un pormenorizado análisis en torno a los alcances de las pautas estipuladas en cada uno de los incisos del art. 12 de la norma citada supra -con las modificaciones introducidas por la ley 27.348- que, finalmente, juzgó de aplicación al caso. De tal razonamiento se desprende, según mi apreciación, que el sentenciante dio respuesta -en forma negativa- a la totalidad de los argumentos de los que se sirvió la accionada para desmerecer la validez constitucional del precepto legal mencionado, circunstancia que me lleva a concluir que la temática que se alega preterida fue atendida en el pronunciamiento de grado, aunque de manera opuesta a los intereses de la quejosa, por lo que cabe descartar, sin más, la configuración del vicio invalidante invocado en el escrito de protesta.

En este aspecto, se ha pronunciado ese alto Tribunal al decir: "*el recurso extraordinario de nulidad es infundado si la cuestión que se denuncia como omitida ha sido resuelta de modo implícito y negativo para las pretensiones del recurrente siendo ajeno a su ámbito el acierto o desacierto jurídico de la decisión*" (conf. S.C.B.A., causas L. 87.056, sent. de 27-III-2008; L. 97.409, sent. de 7-IV-2010; L. 82.926, sent. de 13-VII-2011; L. 98.483, sent. de 21-XII-2011 y L. 111.418, sent. de 13-V-2015 entre otras).

V. Conforme lo hasta aquí expuesto, estimo -como adelanté- que esa Suprema Corte debería rechazar el remedio procesal que dejo examinado.

La Plata, 6 de marzo de 2023.-

Digitally signed by
Dr. CONTE GRAND, JULIO
MARCELO
Procurador General de la
Suprema Corte de Justicia
PROCURACION GENERAL -
PROCURACION GENERAL
Procuracion General

06/03/2023 13:57:00